



Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Distr. general
13 de marzo de 2017
Español
Original: inglés

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

68º período de sesiones

23 de octubre a 17 de noviembre de 2017

Tema 4 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Lista de cuestiones y preguntas relativa al séptimo informe periódico del Paraguay

Marco constitucional, legislativo y normativo

1. El Comité observa que, si bien el artículo 46 de la Constitución prohíbe la discriminación, la legislación del Estado parte no contiene ninguna definición de discriminación con arreglo al artículo 1 de la Convención. En su séptimo informe periódico ([CEDAW/C/PRY/7](#)) el Estado parte indica que en noviembre de 2014 se rechazó un proyecto de ley contra toda forma de discriminación presentado inicialmente ante el Congreso Nacional en 2007 por una red de organizaciones de la sociedad civil (párr. 15)¹. De conformidad con las obligaciones contraídas por el Estado parte en virtud de los artículos 1 y 2 de la Convención y con la meta 5.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo—, indiquen si se ha adoptado, o se tiene previsto adoptar, alguna medida para enmendar la Constitución y aprobar el proyecto de ley u otros instrumentos legislativos a fin de incorporar el principio de la igualdad de mujeres y hombres y definir y prohibir todas las formas de discriminación contra la mujer, incluida la discriminación directa, indirecta, formal y sustantiva por parte de agentes estatales y no estatales en los ámbitos público y privado.

Nota: El presente documento se distribuye únicamente en español, francés e inglés.

¹ Salvo que se indique lo contrario, los números de párrafo hacen referencia al séptimo informe periódico del Estado parte.



Acceso a la justicia

2. En el informe se hace referencia a varios protocolos legislativos aprobados por el Estado parte con el fin de mejorar el acceso de los grupos desfavorecidos a la justicia, en particular las personas con discapacidad sicosocial (resolución núm. 224/15), las personas trans privadas de libertad (resolución núm. 744/15) y las personas mayores privadas de libertad (resolución núm. 790/15) (párr. 12). El Estado parte señala, además, la aprobación de un programa nacional para mujeres privadas de libertad (resolución núm. 168/15) (párr. 13). Indiquen, por favor, si, al elaborar estos protocolos, se ha aplicado una perspectiva de género con el fin de evitar la discriminación interseccional de las mujeres privadas de libertad, y, en caso afirmativo, si se ha evaluado su repercusión.

3. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las barreras persistentes que impiden el acceso de las mujeres a la justicia, especialmente las mujeres rurales e indígenas. Indiquen también si la descentralización del poder judicial ha mejorado el acceso a la justicia para las mujeres que viven en zonas rurales y remotas. Asimismo, faciliten ejemplos de casos, si los hubiera, en que los tribunales nacionales hayan invocado las disposiciones de la Convención, e indiquen qué medidas se han adoptado con el fin de informar a las mujeres sobre los procedimientos de que disponen para hacer valer sus derechos con arreglo a la Convención, denunciar la discriminación y obtener reparación. Indíquese también si las mujeres de ingresos bajos disponen de un acceso adecuado a asistencia letrada.

Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer

4. Expliquen de qué manera la decisión adoptada en 2012 de elevar la Secretaría Nacional de la Mujer a la categoría de Ministerio de la Mujer ha reforzado el mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer en el Estado parte. Reseñen las medidas que se han adoptado para garantizar la armonización entre el Ministerio y los distintos mecanismos de fomento de la igualdad de género que se han creado en diversos ministerios sectoriales e instituciones del Estado (párr. 3), en particular en los planos municipal y local. Sírvanse indicar si dichas entidades tienen mandatos y responsabilidades claramente definidos y si están dotadas de suficientes recursos humanos y financieros. Indiquen también qué medidas se han adoptado para que la descentralización no obstaculice la coordinación entre las entidades municipales que se ocupan de la igualdad de género, especialmente en las zonas rurales y remotas.

5. Proporcionen, por favor, información sobre el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 mencionado en el párrafo 5 del informe, e indiquen si el mecanismo nacional se encargará de su aplicación, coordinación, seguimiento y evaluación y si se dispondrá de recursos suficientes para desempeñar estas funciones.

Medidas especiales de carácter temporal

6. En el informe se hace referencia a diversas iniciativas llevadas a cabo para facilitar la participación de las mujeres en la vida política y pública. Indiquen qué criterios se aplican para su aprobación. Especifiquen también si el Estado parte prevé adoptar otras medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el

artículo 4 1) de la Convención y con la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité, relativa a las medidas especiales de carácter temporal, con el fin de acelerar la participación plena e igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos abarcados en la Convención, en especial aquellos en los que se ven desfavorecidas o están insuficientemente representadas.

Estereotipos y prácticas discriminatorias

7. Sírvanse explicar las medidas que se han adoptado, a nivel de la sociedad y en el entorno familiar y escolar, para hacer frente a la discriminación multidimensional de las mujeres habida cuenta del carácter multicultural y multiétnico del país. Especifiquen si el Estado parte ha adoptado medidas para elaborar una política integral destinada a modificar los patrones sociales y culturales que refuerzan los estereotipos tradicionales relativos a las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres dentro de la familia y de la sociedad. Indíquese, asimismo, cómo regula el Estado parte el Observatorio de Medios de Comunicación en su función de mecanismo de vigilancia para eliminar los estereotipos discriminatorios contra las mujeres en los medios de comunicación. Proporcionen detalles concretos sobre los resultados de los debates celebrados con emisoras de radio comunitarias (párr. 25) y las campañas llevadas a cabo en los medios de comunicación para hacer frente a la violencia de género (párr. 26).

Violencia contra la mujer

8. En el informe se resumen diversos avances legislativos realizados para hacer frente a las elevadas tasas de violencia de género registradas en el Estado parte, en particular un proyecto de ley sobre la protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia (párr. 11). Según la información de que dispone el Comité, este proyecto de ley se aprobó en 2016 ([Ley núm. 5777/16](#)). Expongan las medidas que se han adoptado, incluida la facilitación de suficientes recursos humanos, financieros y técnicos, para garantizar la aplicación plena y efectiva de dicha Ley en todo el país. Expliquen también la razón por la que, según la información de que dispone el Comité, se eliminó la palabra “género” de la totalidad del texto de la Ley. Indiquen qué medidas se prevé adoptar para proporcionar a los miembros del poder judicial, los agentes de policía y los funcionarios de la salud pública una formación adecuada que les permita determinar los factores causales de la violencia de género al gestionar los distintos casos.

9. Sírvanse proporcionar detalles sobre cómo han participado las partes interesadas pertinentes, incluida la sociedad civil, en la aplicación del Plan Nacional para la Prevención, Atención, Protección y Seguimiento de la Violencia contra las Mujeres (2015-2020) mencionado en el párrafo 34 del informe. Faciliten información actualizada sobre las iniciativas en curso destinadas al establecimiento de un mecanismo de reunión sistemática de datos sobre la violencia contra la mujer con el fin de asegurar que se recopilarán, analizarán y difundirán datos en el todo país para combatir de manera eficaz la violencia contra las mujeres y las niñas (párr. 45). Informen, por favor, sobre las medidas adoptadas para velar por que, al gestionar este tipo de casos, los agentes de policía y los agentes fiscales apliquen de manera adecuada las directrices sobre la investigación de casos de violencia familiar o violencia de género (Instructivo General núm. 9/2011) (párr. 39).

10. Indiquen también las medidas adoptadas por el Estado parte para emprender campañas de sensibilización, destinadas en particular a las niñas, los progenitores y los cuidadores, a fin de evitar la estigmatización de las víctimas de violencia y abusos sexuales. En vista del elevado índice de embarazos entre niñas de 10 a 19 años y de los indicios de que muchos de esos casos comportan violencia y abusos sexuales, proporcionen información sobre las medidas adoptadas para investigar la causa de estos embarazos y llevar rápidamente ante la justicia todos los casos de abuso sexual de niñas.

Trata

11. Según la información de que dispone el Comité, el Estado parte es un país de origen y destino de mujeres y niñas sometidas a trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. El Estado parte observa en el informe que en 2012 se aprobó la Ley núm. 4788/12 contra la Trata de Personas, junto con una serie de mecanismos de aplicación (párr. 47). Indiquen si se ha aprobado la propuesta de incorporar en el presupuesto del país un fondo nacional para invertir en la prevención de la trata de personas y en la atención a las víctimas (párr. 47). Proporcionen información sobre el número de casos de trata de personas que se han investigado, en particular de mujeres y niñas, incluidos los perpetrados presuntamente por autoridades públicas y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y especifiquen el carácter de las sanciones impuestas. Indiquen, por favor, qué medidas se han adoptado con miras a la aplicación de la Política Nacional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas y especifiquen si la sociedad civil participa plenamente en los debates sobre las políticas públicas de lucha contra la trata de personas a través de la mesa interinstitucional establecida en virtud de la Ley núm. 4788/12. Indiquen qué medidas específicas se han adoptado para prevenir la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso de mujeres, adolescentes y niñas indígenas.

Participación en la vida política y pública

12. Faciliten información sobre las medidas adoptadas para reforzar el sistema de cuotas destinado a lograr un mínimo del 20% de representación de mujeres en el Parlamento (párr. 56) y para ofrecer asistencia a las candidatas a cargos electivos en el Estado parte, especialmente a nivel local. Indiquen si se han adoptado medidas para aumentar la representación de las mujeres en el servicio diplomático. Proporcionen información actualizada sobre el proyecto de ley de paridad democrática presentado ante la Cámara de Senadores en 2016, así como sobre el calendario para su aprobación. Indiquen, asimismo, qué medidas se han adoptado para hacer frente a los obstáculos estructurales que impiden que las mujeres indígenas y rurales disfruten de una participación plena e igualitaria en la adopción de decisiones políticas.

Defensores de los derechos humanos

13. Indiquen, por favor, si se dispone de mecanismos de protección para gestionar las denuncias de intimidación y hostigamiento contra las defensoras de los derechos humanos y las abogadas que trabajan en los ámbitos de la violencia contra la mujer y los derechos sexuales y reproductivos. En concreto, proporcionen información

detallada sobre las investigaciones llevadas a cabo en respuesta a las recomendaciones formuladas en 2016 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (véase [CERD/C/PRY/CO/4-6](#), párr. 30) en relación con las denuncias de posibles actos arbitrarios por parte de autoridades públicas contra los defensores de los derechos humanos, incluidos los líderes indígenas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas.

Educación

14. Proporcionen información actualizada sobre el progreso realizado en el Estado parte para ofrecer una educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos apropiada a las diferentes edades y en todos los niveles educativos. En particular, indiquen qué medidas se están adoptando para hacer frente al aumento del índice de embarazos entre niñas de 10 a 19 años (que representan el 20% del total de embarazos) (párr. 71) y expliquen cómo se ha difundido la campaña pública sobre el embarazo en la adolescencia del Paraguay y si se ha evaluado su repercusión. Asimismo, presenten datos sobre las tasas de deserción escolar de las niñas debido al embarazo y sobre los gastos indirectos de la educación que pudieran impedir el acceso de las mujeres y las niñas a los estudios, especialmente en hogares encabezados por una mujer y en las comunidades indígenas. Especifiquen qué medidas se han adoptado para facilitar el regreso de las madres adolescentes a la escuela a fin de que concluyan su educación, e indiquen si alguna de esas medidas ha tenido repercusión en las tasas generales de deserción escolar de las niñas. Sirvanse indicar qué medidas se prevé adoptar para aumentar la participación de las mujeres en los ámbitos de formación profesional no tradicionales y en los estudios tecnológicos y científicos en los niveles secundario y terciario. Especifiquen también qué medidas se han adoptado para hacer frente a las tasas de analfabetismo de las mujeres adultas, especialmente las mujeres rurales e indígenas.

Empleo

15. Faciliten, por favor, información sobre las medidas concretas adoptadas para promover el empleo de las mujeres en sectores no tradicionales mejor remunerados, en particular mediante el uso de medidas especiales de carácter temporal, y para aplicar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm. 100), de la Organización Internacional del Trabajo. Tras la aprobación de la Ley núm. 4819/2012 sobre los Derechos de las Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico, indiquen qué medidas se han adoptado para aplicar la recomendación del Comité de reforzar la vigilancia del trabajo infantil doméstico no remunerado (*criadazgo*), aplicar políticas destinadas a erradicar esa práctica y llevar a cabo campañas de concienciación a través de los medios de información y los programas de educación pública (véase [CEDAW/C/PRY/CO/6](#), párr. 29). Indiquen también si se han tomado medidas para responder a las preocupaciones planteadas en 2012 por el Comité sobre los Trabajadores Migratorios (véase [CMW/C/PRY/CO/1](#), párr. 26) en relación con las denuncias de abusos sufridos por los trabajadores del servicio doméstico, como el trabajo forzoso, las remuneraciones inadecuadas y los horarios de trabajo excesivos. Proporcionen información detallada sobre si se han establecido mecanismos de inspección del trabajo en todo el país, así como sobre las tendencias

concretas que se hayan detectado en cuanto al tipo de violaciones a las que se enfrentan las trabajadoras y sobre los mecanismos que existen para hacerles frente.

Salud

16. Informen, por favor, sobre la aplicación de la Ley núm. 4313/11 en lo referente a la disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos y aprovisionamiento del kit de partos, e indiquen cómo se distribuyen dichos kits, en particular para las mujeres que viven en zonas rurales y las mujeres indígenas. Proporcionen información sobre los obstáculos que impiden la aprobación del proyecto de ley sobre salud sexual, reproductiva y materno-perinatal, ya que, según la información de que dispone el Comité, se incluyó en el programa legislativo por tercera vez en 2013, pero la Cámara de Senadores no pudo examinarlo. Proporcionen también información actualizada sobre la tasa de mortalidad materna y sus causas principales. Además, indiquen cómo tiene previsto llevar a cabo el Estado parte la campaña nacional para reducir la mortalidad materna e infantil (párr. 86) y señalen si se dispone de suficientes asignaciones presupuestarias para su aplicación.

17. En vista de que la tasa de mortalidad materna incluye un elevado porcentaje de muertes causadas por abortos practicados en condiciones de riesgo, expliquen las medidas adoptadas para evitar este tipo de abortos que no entrañen la penalización de las mujeres. Indíquese también qué medidas se han adoptado para poner en práctica las directrices sobre la prestación de servicios integrales de asistencia posaborto y especifíquese si se han evaluado los efectos de los servicios prestados. Indiquen, asimismo, si se ha adoptado alguna medida para revisar la restrictiva legislación sobre el aborto, que solo autoriza la interrupción del embarazo cuando existe un riesgo grave para la vida de la mujer o la niña y no prevé ninguna otra excepción, ni siquiera en casos de violación, incesto y defectos graves del feto.

18. Habida cuenta del elevado índice de embarazos en la adolescencia y de las indicaciones de que muchas niñas que no han cumplido la edad mínima de libre consentimiento recurren al aborto, informen sobre qué medidas se están adoptando para hacer frente a este problema. Proporcionen también datos sobre los programas mencionados en el párrafo 71 del informe destinados a reducir el número de casos de embarazo precoz, así como sobre los servicios ofrecidos para que las madres adolescentes cuenten con el apoyo necesario en materia de nutrición, salud y atención psicosocial.

Mujeres con discapacidad

19. Especifiquen, por favor, qué medidas se han adoptado para ejecutar el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2015-2030. Indiquen hasta qué punto se ven desproporcionadamente afectadas las mujeres con discapacidad por la pobreza y por la falta de acceso a los servicios de salud, a la educación y al empleo. Presenten ejemplos concretos de planes de protección social existentes cuyo fin sea reducir la carga económica que recae sobre la mujer en los grupos desfavorecidos, especialmente sobre las mujeres con discapacidad. Indiquen qué medidas se han adoptado para velar por que las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia, incluidas las mujeres con discapacidad, tengan un acceso adecuado a la asistencia médica y psicosocial y también a programas de protección de víctimas y testigos. Reseñen las medidas que se han adoptado para hacer frente a

las violaciones de los derechos reproductivos que sufren las mujeres con discapacidad, en particular los casos de esterilización forzada. Proporcionen también información detallada sobre las medidas adoptadas para evitar la explotación sexual y económica, el abuso y la trata de mujeres indígenas con discapacidad.

Mujeres indígenas y rurales

20. El Estado parte describe en el informe las medidas adoptadas para lograr la igualdad para las mujeres rurales y las mujeres indígenas (párr. 97). Proporcionen información actualizada sobre la ejecución de los programas correspondientes e indiquen si se ha evaluado la repercusión que tienen para las mujeres que viven en la pobreza extrema. De conformidad con lo previsto en la recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, expliquen en qué medida han participado las mujeres rurales y las mujeres indígenas, incluidas las mujeres de ascendencia africana, en la elaboración de los programas mencionados y otros programas descritos en el informe para hacer frente a la pobreza extrema, especialmente en la región del Chaco. Describan, por favor, cómo compagina el Estado parte el desarrollo rural con la demarcación de los derechos territoriales ancestrales de las comunidades indígenas. Sirvanse indicar también qué medidas se han adoptado para velar por que las mujeres indígenas dispongan del control de sus recursos y puedan practicar su modo de vida tradicional.

Mujeres refugiadas y solicitantes de asilo

21. El informe no contiene información sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en el Estado parte, ni sobre solicitudes de asilo basadas en la persecución por razón de género. Informen, por favor, sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las lagunas de protección existentes relativas a los derechos de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, así como para aumentar la eficacia de la Ley sobre Refugiados (Ley núm. 1938/02). Indiquen si se ha aprobado el proyecto de decreto global que está examinando actualmente la Comisión Nacional de Refugiados. Sirvanse indicar si se han tomado medidas para establecer un mecanismo oficial destinado a determinar las personas que necesitan protección internacional, en particular las mujeres refugiadas, las mujeres apátridas y las víctimas de la trata de personas. Indiquen si se ha adoptado una estrategia integral para detectar y evitar las situaciones de violencia sexual y de género que afectan a las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo y dar respuesta a dichas situaciones, así como para velar por que tengan un acceso adecuado a centros de acogida y servicios médicos y de asesoramiento, de conformidad con la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño, aprobadas de manera conjunta (2014), sobre las prácticas nocivas.

Matrimonio y relaciones familiares

22. En el informe se señala que, si bien se ha aumentado a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio mediante la promulgación de la Ley núm. 5419/15, dicha Ley incluye una disposición por la que, en circunstancias excepcionales y con el

consentimiento de un progenitor, un tutor o un juez, se podrá autorizar el matrimonio a los 16 años. Reseñen, por favor, las salvaguardias establecidas con el fin de proteger a las niñas menores de 18 años que hayan recibido autorización para casarse. Especifiquen también las medidas adoptadas para cambiar las actitudes culturales ante el matrimonio precoz mediante la difusión de campañas de concienciación, en particular entre las comunidades rurales e indígenas. Indiquen si existe un mecanismo para registrar los matrimonios infantiles, especialmente en las zonas rurales, remotas e indígenas.
